

# *Espejo roto*

**Santos Juliá, El País, 05/03/1995**

Desmemoriada como toda comunidad humana, pues sin una dosis de olvido es imposible vivir, la española tendió tal vez a olvidar demasiado sus raíces históricas. Olvidadas las ominosas décadas de la dictadura, enterrada la memoria de la guerra civil, rodeada de melancolía la ingenua esperanza de la República, pasada la página de la oligarquía y el caciquismo de la restauración, nos convertimos en ejemplo del que todo el mundo podía aprender. Pueblo maduro, joven y modélica democracia, nos erigimos en ejemplo de las repúblicas hermanas de América y no faltaron quienes, más atrevidos, se llegaron a Moscú para impartir seminarios sobre el caso español. España era, otra vez, un caso, pero a diferencia del caso que siempre había sido, ahora se proponía como caso ejemplar. Éramos como Europa, y hasta más que Europa en todos los sentidos, puesto que nuestra lección tenía alcance universal.

Y de pronto, toda la historia olvidada, como soterrada en nuestra memoria, se nos ha subido a la cara y el espejo en que nos contemplábamos ufanos cada mañana, sin poderlo resistir, ha saltado hecho añicos. Por aquí, es esta esquirra, asoma retador el gesto de un matón de barrio de los años cuarenta; por allá, la sonrisa del fugado, capaz de burlar todos los servicios de seguridad; más atrás, las muecas de unos políticos que todavía sienten primarias emociones ante la policía uniformada, y en las brumas del exilio, el sinuoso confidente que habla a la vez con la policía y con el presunto delincuente.

Fondos reservados, confidentes, cuentas secretas, hampones, chulos de barrio, fugas: como si no hubiera pasado el tiempo desde que Martínez Anido fuera el hombre fuerte del Ministerio de Gobernación. El destrozo ha sido tan monumental que se hizo de todo punto necesario emprender una drástica operación para recomponer de nuevo la imagen. A pesar de un rampante escepticismo, la empresa fue acometida bajo el mismo liderazgo responsable del estropicio. Caras nuevas, voluntades más enérgicas, decisiones más firmes, renovación de equipos, defensa del Estado de derecho y... a trabajar sin

detenerse ante las consecuencias. Hasta el final, caiga quien caiga, fue la nueva consigna. Los tiempos exigían un cambio y, aunque con evidentes signos de fatiga, un Gobierno renovado emprendía la tarea purificadora.

No contaron con que esa decisión podía tumbar como piezas de dominó, una arrastrada por otra, a los primeros actores de la trama. Si caigo yo, tú me acompañas, dicen que fue el argumento para templar las ínfulas renovadoras de González. Si yo voy a la cárcel, otros se pudrirán conmigo, clamó el matón; si me cogen, tiro de la manta, amenazó el fugitivo. Y entonces, en lugar de recurrir a la proverbial madurez del pueblo español y contarle toda la verdad posible, pretendieron encerrarnos en el jardín de infancia por ver si podían ahorrarnos la verdad entera. La voluntad de renovación se convirtió en estrategia de ocultación, no fuera a ser que los españoles, asustados como niños, se tiraran de cabeza por el precipicio de su propia historia.

Y en éstas estamos: se han empeñado con tanto ahínco en tratar de ocultar los hechos, que el mayor reproche que tendremos que dirigir a este Gobierno es su escandalosa falta de confianza en ese mismo pueblo que por cuarta vez le otorgó, aun si a regañadientes, la suya. Esta es, en efecto, una ciudadanía madura, dotada además de instituciones a prueba de los terremotos provocados por sus mismos titulares. ¿Por qué, entonces, no confiar si al no hacerlo lo único que consiguen es incurrir en un bochornoso ridículo y arriesgar el crédito y la solidez misma de la democracia que dicen defender? Pues, al final, lo que menos se puede aguantar de toda esta historia de matones y fugados no es que nos hayan pretendido engañar en casi todo y casi siempre, sino en que, al querer ocultarnos la verdad, nos han tomado por niños incapaces de aceptar que Roldán, como los bebés, tampoco viene de París.

# *Doble vigilancia*

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 18/06/1995

Dos parecen ser las claves de la actual crisis política. La primera tiene que ver con los objetivos trazados por quienes sufrieron, en palabras de Pedro J. Ramírez, un "*shock* por el triunfo contra pronóstico del felipismo" en las elecciones de 1993; la segunda, con el poder del Estado y su ejercicio desde 1982. Pensar que la una es accidental respecto a la otra sería cerrar los ojos a una parcela de la realidad. Si se cree al adalid de los traumatizados de 1993, el triunfo del PSOE sólo fue posible porque González recurrió al "atavismo y a la falsificación" para hacer aflorar un millón de votos "con los que nadie contaba". Por supuesto, el resultado habría sido diferente si hubiera llovido, si a Anguita no le hubiera dado el infarto, si Aznar "no hubiera estado tan rematadamente mal en Tele 5" o si, colmo de la petulancia, el "CDS me hubiera hecho caso". En resumen, un resultado aleatorio o trucado, conseguido gracias al azar y a las artes embaucatorias de González y que era preciso combatir con todos los medios posibles.

Pues lo que en modo alguno cabía aceptar resignadamente era el veredicto de las urnas. Al sentimiento de frustración, Ramírez respondía con una llamada a la acción. El sistema, escribía, aún ofrece suficientes "resquicios y oportunidades como para que merezca la pena seguir intentando alterar el curso normal de las cosas". Surgió así la especie de que una cosa es la mayoría parlamentaria y otra la mayoría social y que, por tanto, la situación sólo podía modificarse fuera del Parlamento, por empuje de esa supuesta mayoría guiada por líderes como Mario Conde, autor de "alentadoras teorías sobre la vertebración de la sociedad civil". La insistente identificación del régimen con el, "felipismo" permitía achacar a la forma de Estado las corruptelas del Gobierno y presentar el combate contra la corrupción como exigencia de una segunda transición hacia un diferente régimen político.

Todo eso habría sido impotente delirio si los gobiernos del PSOE no hubieran proporcionado munición más que suficiente a operaciones deslegitimadoras del régimen como la que está en curso. Joaquín Leguina ha perdido otra preciosa oportunidad de callarse cuando decía en el último número

de *Tribuna*: "Mire usted, al señor Ramírez se le ha acabado la munición, la gruesa, y a partir de ahora disparará con Mauser". Leguina podía haber sospechado que, después de la impresionante serie de tropelías cometidas bajo gobiernos socialistas, quedaba en el arsenal abundante munición, pues han sido sus correligionarios quienes la han fabricado y acarreado a manos llenas hasta depositarla a los pies, no de sus adversarios políticos sino de los enemigos del régimen. Es la impunidad establecida como norma y estilo de gobierno desde 1982 la que ha llevado a la democracia a su hora más baja y a su más sombrío horizonte.

Y en este punto, a todos nos alcanza alguna responsabilidad, porque hemos tendido a olvidar, como ñoña advertencia de viejos anticuados, la tesis que el liberalismo proclama desde hace un siglo: que el poder del Estado, como resumía Karl Popper, es un *"dangerous though necessary evil"*, un mal peligroso pero necesario, de modo que "si relajamos la vigilancia y no reforzamos nuestras instituciones democráticas, podemos perder nuestra libertad". Popper sabía de qué hablaba: fue la deslegitimación de la República de Weimar, a la que contribuyeron conspicuos intelectuales y publicistas, lo que hizo perder al pueblo alemán su libertad a manos de agitadores y demagogos.

El problema del perplejo ciudadano es que la vigilancia debe montarse ahora en una doble dirección: frente a los poderes del Estado que, con fines miserables, han violado el supremo bien de la intimidad de las personas; y frente a esos poderes sociales que no han dudado en comprar a policías y militares doblemente corruptos con objeto de "alterar el curso normal de las cosas" y conseguir por medios espurios lo que no pudieron obtener por las urnas.

# *La culpa, a la transición*

SANTOS JULIA 01/10/1995

Por una vez parece que se renueva el consenso: a mucha gente le ha dado por cargar sobre la transición la culpa de lo que ha ocurrido en los últimos años. Unos lo creen así porque han tenido de siempre la transición como una traición; porque se hizo mal desde el principio, cediendo en cuestiones fundamentales, con una oposición que a última hora se entregó atada de pies y manos al régimen. El resultado está a la vista: por no haberse realizado la transición como era debido, es decir, bajo la dirección de los entonces marginados, el régimen actual es un estado de excepción permanente, una tiranía. La democracia es quizá nuestro futuro, pero no nuestro presente, mucho menos nuestro reciente pasado.

Pero los adalides de esta segunda y definitiva transición a la democracia han recibido un inestimable refuerzo de quienes, desde dentro de las filas socialistas y después de decidir que nadie es políticamente responsable de los GAL, han achacado esta página negra de nuestra historia no por supuesto a una decisión tomada en la cúspide, tampoco a una estrategia diseñada en niveles intermedios, ni siquiera a una pasiva complicidad ante iniciativas de la base. No, nada de eso. La culpa es de la transición; de que se dejó en sus puestos a los responsables policiales; de que la transición, en definitiva, no llegó a las entretelas del Estado, allí donde anidan los entonces llamados poderes fácticos.

Como puede sentirse vívidamente ahora, en esas intensas imágenes de nuestro pasado recogidas en la excelente serie de Victoria Prego, nada estaba escrito hace 20 años, cuando se inició el proceso de la transición. Las cosas pudieron haber salido mal, rematadamente mal, pero por decisiones tomadas por personas concretas aquel proceso de cambio de régimen fue uno de esos rarísimos momentos de la historia política de España en el que casi todo salió bien. La permanencia de la policía y del ejército no impidió la disolución de las instituciones franquistas, ni la legalización del PCE, ni la celebración de elecciones generales, ni la masiva aprobación de una Constitución democrática, ni la llegada de los socialistas al poder. Lo que ocurrió en el plano de la política, desde 1976 en adelante, no estuvo determinado por la permanencia de los

aparatos represivos franquistas. Sin duda, la continuidad de la Administración del Estado y de sus fuerzas de seguridad marcó límites respecto a lo que se podía hacer o, más exactamente, a lo que la izquierda pretendía hacer, a su programa máximo; determinó lo que no se hizo -un Gobierno provisional, un referéndum sobre la forma de Estado-, pero no lo que se hizo. Lo que se hizo hay que atribuirlo a decisiones tomadas por personas de carne y hueso en circunstancias fluidas, cambiantes debido precisamente a esas decisiones. Hay responsables de todo aquello, no fue una fatalidad ni estaba escrito en el cielo. Como tiene también responsables concretos, con nombres y apellidos, que la herencia de la transición tomara a partir de 1982 el rumbo que ha conducido a lo que ahora tenemos.

La llegada de los socialistas al Gobierno, en condiciones sin precedente en nuestra historia, llevados en volandas de un mandato universal, les abrió un terreno de juego mucho más amplio y más dúctil del que se encontraron el Rey y Suárez a mediados de 1976. Sin duda, tuvieron que administrar ese mandato dentro de los límites que impone la realidad: nadie, nunca, tiene por fortuna todo el poder. Pero nadie, excepto ellos, tiene la responsabilidad de las políticas concretas desarrolladas a partir de ese momento, de lo que se hizo y, sobre todo, de la forma de hacerlo. A lo que ahora nos enfrentamos no es a una herencia de la transición, menos aún a los últimos coletazos del franquismo. Es, por decirlo con una imagen, al resultado de la embriaguez producida en los jóvenes corazones socialistas por el saludo, firmes y con sonoro taconazo, que recibieron de la Guardia Civil el día que llegaron al poder.